

Tomás pide garantizar por ley la homologación del gasto universitario a la UE

VIENE DE LA PÁGINA 1

El proceso de convergencia europea no sólo exige "coordinación" al máximo entre todas las Administraciones públicas, universidades e instituciones privadas, aclaró ayer el rector Francisco Tomás, sino que sobre todo será caro. De manera que para cumplir con los "objetivos" del comisario europeo Philippe Busquin —consistentes en "contratar medio millón de investigadores más en los próximos años, si se quiere hacer de Europa la economía más dinámica del mundo basada en el conocimiento"—, el rector propuso al nuevo Gobierno autonómico de Francisco Camps trabajar codo con codo con la Conferencia de Rectores de Universidades Valencianas (CRUV) para establecer "mecanismos" que garanticen por ley una homologación gradual del gasto público universitario similar al porcentaje del PIB que destinan los países más avanzados de la Unión Europea.

El rector de la Universitat de València pidió al presidente Camps que aproveche la "voluntad declarada de promulgar una ley valenciana de universidades a lo largo de la presente legislatura" para que, lejos de "defraudar las expectativas que ha despertado entre los universitarios", el futuro marco legal cumpla, en su opinión, con el objetivo triple de

"contribuir a la modernización del sistema universitario, suprimir obstáculos; y establecer mecanismos que garanticen a las próximas generaciones el acceso a la universidad en condiciones dignas".

Consciente del compromiso asumido en campaña, el presidente Camps se anticipó al debate parlamentario en ciernes y adelantó que "en los Presupuestos que se están elaborando en estos momentos ya se contempla un aumento claramente superior" al anterior ejercicio del presupuesto conjunto que reciben las cinco universidades públicas valencianas conforme a las directrices fijadas en 1999 en el Plan Plurianual de Financiación, que precisamente venció en diciembre.

El jefe del Consell aprovechó el acto inaugural para justificar el giro impreso por su Administración al modelo de financiación de la I+D regulado por el ex presidente Eduardo Zaplana en forma de agencia única. En ese sentido, Camps justificó la desaparición de la Agencia Valenciana para la I+D y "la creación de la Comisión Delegada de Gobierno para la Investigación, que aglutina a todas las consejerías vinculadas a esta materia" asegurando que "con la remodelación se pretende ganar en proximidad entre Administración y Universidades" y en "eficacia en la ges-



SANTIAGO CARREGUI

PROTESTA SALARIAL. No faltó ayer el talante reivindicativo habitual en otros actos de la Universitat. El forcejeo entre un grupo de laborales que quería acercarse al rector Francisco Tomás y el equipo de seguridad tensó la ceremonia y abrió fisuras entre los sindicatos. El STEPV y CGT denunciaron "la actitud de la Universitat ante las agresiones sufridas", mientras CC-OO y UGT les acusan de "ordenar las relaciones con la institución cuando se va a abrir una negociación para mejorar las condiciones".

ción de recursos" destinados a financiar proyectos científicos.

La ciencia ocupó el eje central del discurso del rector Tomás, que reclamó como "una de las necesidades más urgentes, que el sistema de I+D español y el valenciano se regularicen a través de las nuevas estructuras de gobierno universitarias lo antes posible, y se le reconozca el papel esencial que le corresponde". Fue un discurso centrado en la ciencia como instrumento democratizador y motor de cambio,

como defendió en la "lección magistral" el profesor Juan Segura García. El rector Tomás —flanqueado por sus homólogos Justo Nieto, rector de la Politécnica de Valencia; Salvador Ordóñez, de la Universidad de Alicante; Jesús Rodríguez Marín de la Miguel Hernández de Elche, y Francisco Toledo de la Jaume I de Castellón— lanzó un dardo contra el proceso obligatorio de reforma estatutaria en el que está inmersa la universidad española con la entrada en vigor de la Ley

Orgánica de Universidades (LOU). También abogó por el espíritu de los Estatutos aprobados bajo la gestión del rector Ramón Lapiedra en 1985 y defendidos en la pasada legislatura por el ex rector Pedro Ruiz para evitar los intentos del PP en la pasada legislatura por rebajar del marco estatutario, lo que el rector Tomás definió como "los valores europeos" y "enraizados en el territorio y pueblo valenciano" heredados del origen renacentista de la Universitat de València.